

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA LABORAL**

Medellín, veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinte (2020)

**Demandante:** Luz Yaneth Peña Caicedo

**Demandadas:** Protección, Colfondos y Colpensiones

**Radicado:** 05 001 31 05 020 2018 00226 00

**AUTO**

Para representar a la demandante, se le reconoce personería jurídica a la doctora Maria Laura Forero Leal, identificada con cédula de ciudadanía 1.128.428.629 y tarjeta profesional 221.867 del Consejo Superior de la Judicatura.

**SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 020 2018 00226 00 promovido por la señora **LUZ YANETH PEÑA CAICEDO** en contra de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. - PROTECCIÓN, COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS - COLFONDOS** y la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**. Con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de la demandante y de Colpensiones en contra de la sentencia emitida el 16 de

diciembre de 2019 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín. Y revisar en consulta la misma providencia en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de emergencia, económica, social y ecológica”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **124**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

### **ANTECEDENTES**

Luz Yaneth Peña Caicedo demandó a Protección, a Colfondos y a Colpensiones pretendiendo se declare la nulidad y/o ineficacia de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Colfondos y por Protección; y como consecuencia, se disponga el restablecimiento de su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin solución de continuidad; la devolución a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones del capital aportado en su cuenta de ahorro individual incluidos los rendimientos e intereses, bono pensional y gastos de administración, la cotización efectuada mes a mes, sin descuentos para pensiones de invalidez y sobrevivientes, gastos administrativos, comisiones y garantía de pensión mínima; y la validación de estos aportes por parte de Colpensiones.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, desde el 8 de septiembre de 1980 hasta el 18 de septiembre de 1996. El 3 de octubre de 1996 se trasladó al RAIS, administrado por Colfondos. El asesor del Fondo Privado le indicó que: “... De hacerse efectivo su traslado, se podría pensionar a cualquier edad, que el Seguro Social se iba a acabar, que su pensión se podía heredar, que se pensionaría antes de cumplir la edad exigida por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones...”. Posteriormente, basada en argumentos de mayor rentabilidad y

renombre del Fondo, suscribió solicitud de traslado a Protección. Ambos fondos omitieron informar a la demandante las consecuencias reales del traslado, sobre la pérdida del régimen de transición, el capital que requería para pensionarse, el tiempo que debía permanecer allí para reunir el capital y recibir una pensión digna de acuerdo a sus ingresos y expectativas; tampoco informaron en qué consistía el bono pensional, las implicaciones del traslado al RAIS, que si decidía pensionarse antes de los 60 años su bono pensional sería vendido en una bolsa de valores reduciéndose el valor del mismo y afectando el capital ahorrado y la mesada pensional, no le explicaron que el monto de la pensión dependía de la existencia de beneficiarios de ley y que, ante la existencia de ellos, el cálculo de la mesada pensional se podría disminuir. Que los Fondos referidos la engañaron e indujeron en error y dolo por guardar silencio sin analizar de manera detallada la situación particular frente al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Omitieron informar sobre la destinación de porcentajes de la cotización para cubrir gastos de administración, comisiones y fondo para garantía de pensión mínima. Mediante comunicación CAS-1858984-P6S7X4, Protección le informó que “...El capital faltante para poder financiar una mesada pensional igual a \$1.750.911 es de \$255.675.564...”, contrario a lo que sucedería en el RPM, que, con el número de semanas cotizadas y edad de la demandante obtendría una tasa de reemplazo mínima entre 70.5% y 80% y mesada cercana a \$2.000.000. Mediante comunicaciones del 17 y 27 de febrero de 2018, los Fondos Privados le negaron solicitud de declaratoria de nulidad de la afiliación. Agotó la vía administrativa ante Colpensiones, recibiendo respuesta negativa para el traslado.

En sentencia proferida el 19 de diciembre de 2019, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia del traslado de la señora Luz Yaneth Peña Caicedo del Régimen del Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Protección y por Colfondos; entendiéndose que la demandante ha estado afiliada válidamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones; y les ordenó: i) A Protección, en un término no mayor a 30 días, trasladar la totalidad de los aportes contenidos en la cuenta de ahorro individual de la demandante, con los respectivos rendimientos causados, a Colpensiones. Y ii) A Colpensiones recibir de Protección los valores aludidos e incorporarlos

como aportes pensionales en la historia laboral de la accionante. Y condenó a las codemandadas a pagar las costas del proceso.

### **RECURSO DE APELACIÓN**

La apoderada de la demandante, solicita se revise la decisión de primera instancia. Porque la orden emitida no debe limitarse exclusivamente al traslado de los saldos que existan en la cuenta de ahorro individual y sus rendimientos, sino que, dichos traslados cobijen cuotas de administración, comisiones, primas de seguros, pensionales, aportes al fondo de garantías de pensión mínima o similares, aportando si es del caso los valores que falten como si siempre hubiere permanecido cotizando en el régimen de prima media. Pues con esto, se evita el desequilibrio financiero del Sistema de la Seguridad Social, toda vez que, al no trasladar los valores referidos, se estaría imponiendo a Colpensiones una carga que no está obligada a soportar.

La apoderada de Colpensiones, no comparte la decisión de primera instancia. Primero, porque conforme a los numerales tres y cuatro de la sentencia y con base en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral radicados 31989 de 2008, 17595 de 2017, 4989 de 2018 y recientemente 1421 de 2019, se debe reintegrar la totalidad de la cotización, es decir los recursos que hay en la cuenta de ahorro individual de la demandante, pero además, las cuotas abonadas al fondo de garantía de pensión mínima, los rendimientos, incluso la relación de bonos pensionales, los porcentajes destinados al pago de seguros provisionales y los gastos de administración.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada sustituta de la parte demandante dentro del término legal allegó escrito de alegatos de conclusión indicando que la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, reitera el deber de información a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, estableciendo la procedencia de la ineficacia del traslado de régimen pensional cuando se acredite su inobservancia como en el presente caso y en atención al grado jurisdiccional de consulta, es

menester que la demandada devuelva a Colpensiones la totalidad del ahorro contenido en la cuenta de ahorro individual de la actora. Incluyendo los frutos, rendimientos o similares que se hayan obtenido, se encuentren o no en dicha cuenta de ahorro individual sin descontar valor alguno por cuotas de administración, comisiones, primas de seguros previsionales, aportes al fondo de garantía de pensión mínima o similares aportando los valores que falten, esto es que todo el ahorro que se debe trasladar al régimen de prima media no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente.

El apoderado de Colpensiones, allegó oportunamente escrito de alegatos de conclusión haciendo referencia a los mismos puntos del recurso de apelación y adicionando respecto de la condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia, que la misma no es procedente, teniendo en cuenta que Colpensiones es un tercero de buena fe que fue citado al proceso precisamente en calidad de Administradora de los Recursos del Régimen de Prima Media con prestación definida.

Frente al recurso promovido por la apoderada de la demandante, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si el traslado entre administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, efectuada por la actora se torna ineficaz como lo precisó el Juzgador de primera instancia, y en caso afirmativo, se establecerá si ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, así como definir las restituciones a que haya lugar entre entidades pensionales.

### **CONSIDERACIONES**

Esta Sala acoge el precedente jurisprudencial pacífico, que en temas en un principio de nulidad y posteriormente de ineficacia, ha desarrollado la Honorable

Corte Suprema de Justicia con ya 11 años de desarrollo, esto es, desde las sentencias 31989 y 31214 de 2008, cuando se analizó la situación que nos convoca bajo la óptica de la *nulidad del acto jurídico*, situación que cambió en cuanto a su consecuencia jurídica a partir de la sentencia SL 12136 de 2014.

La figura de la ineficacia, en materia de elección de un fondo pensional, tiene su sustento en la parte final del inciso primero del artículo 271 de la Ley 100 de 1993, cuando hace referencia al hecho que si por cualquier forma se atenta contra el derecho a la afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se dejará sin efecto la afiliación respectiva.

Según se desprende de los fundamentos fácticos de la acción, se duele la parte actora de la omisión por parte de Colfondos y de Protección, del deber de información, por tanto, se hace necesario abordar bajo tal óptica la situación del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por Colfondos proveniente del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, llevado a cabo el 3 de octubre de 1996.

Respecto a la información que deben brindar los fondos de pensiones a quienes pretenden captar como sus afiliados, es importante tener en cuenta que el mismo no tiene como fuente primigenia la llamada ley de doble asesoría 1748 del 2014, con su Decreto Reglamentario 2071 de 2015, pues dicha obligación existe desde el estatuto orgánico del sistema financiero, decreto 663 de 1993 en su artículo 97, que en su texto original previo a la Ley 795 de 2003, imponía suministrar la información necesaria para la transparencia, así como para permitir tener elementos de juicio claros y objetivos y así tomar la mejor opción, al igual que el Decreto 720 de 1994 en sus artículos 10 y 12, que determina que la información suministrada debe ser suficiente, amplia y oportuna, trasladando además las responsabilidades del asesor de los fondos pensionales a las entidades que representan.

Ahora bien, es importante precisar que, al tratarse de la multicitada figura de la *ineficacia*, esta no es susceptible de saneamiento, a más que lo se pretende es dejar sin efectos el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, esto es,

el acto jurídico realizado por la asegurada el 3 de octubre de 1996 ante Colfondos y el 8 de agosto de 1997 ante Protección, por tanto, el análisis debe centrarse exclusivamente al cumplimiento o no del deber de información de dicho momento lo cual tiene su sustento en la sentencia SL 1688 de 2019, que como su referente lo indica proviene de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

El análisis del tema pensional, bajo la perspectiva del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, es un tema complejo, pues refiere múltiples aspectos y variables como lo son la forma de liquidación de las prestaciones en el caso que el afiliado tenga o no beneficiarios, los capitales requeridos para pensión ordinaria o anticipada, las condiciones de la garantía de pensión mínima, las modalidades de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, la forma en general como se financia la prestación, la incidencia de las fluctuaciones de los mercados en cada cuenta de ahorro individual, y en general, en principio, más que un comparativo de los montos pensionales su diferentes aspectos de un régimen frente al otro, situaciones estas básicas que son comprendidas dentro de los mandatos del artículo 97 del Decreto 363 de 1993 que disponía para el momento del traslado de la actora: "...1. Información a los usuarios. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado..." y, por su parte, el Decreto 720 de 1994 en su artículo 12, cuyo texto preceptúa: "...Obligación de los promotores. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado...", por lo que la Honorable Corte Suprema de Justicia delimitó como un primer momento frente al deber de información.

Dado el anterior precedente, es claro para la Sala de Decisión, que a la señora Luz Yaneth Peña Caicedo, no se le suministró la información de la forma que ha determinado nuestro máximo órgano de cierre jurisdiccional, o al menos no obra

como una verdad procesal, pues la única referencia que se tiene al respecto es lo narrado por la actora el interrogatorio de parte, donde advierte que no le dieron mayores explicaciones distintas a que el Instituto de Seguros Sociales se acabaría, que era más rentable vincularse a Protección, que el Fondo Privado pertenecía al sindicato Antioqueño, que la pensión era heredable, que se podía pensionar con menor edad y con mejor mesada pensional.

Para definir lo anterior, se hace imperioso determinar a quién corresponde la carga de la prueba de la omisión total o parcial al deber de información al momento de la afiliación o traslado, y en dicho sentido la Sala acoge el precedente reiterado de la inversión de la carga de la prueba, con fundamento en las Sentencias SL 1.452 y SL 1.688 de 2019 donde la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, explicó, que en los procesos en los cuales se controvierte la eficacia del traslado entre regímenes pensionales, la demostración del consentimiento informado es el que tiene la virtud de generar la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez; “...si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó...”.

Según la Corporación mencionada, la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia “...en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada –cuando no imposible- o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarlo el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento...”.



Conforme al criterio expuesto, lo afirmado en un formulario de traslado de régimen pensional acerca de la selección libre y voluntaria de régimen por parte de un afiliado, no puede calificarse como tal si éste no recibe información veraz, oportuna, clara, comprensible y completa sobre los alcances de dicha decisión, ni el traslado se convalida en fecha posterior con la simple firma de otro formato o con la sola presentación de un cálculo actuarial, considerando el cambio sensible que ese acto jurídico genera en el derecho pensional de los afiliados al sistema, y considerando que el acto del cual se estudia la ineficacia es el de traslado de régimen.

Además, el deber de información a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones no es un privilegio de quienes se benefician del Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (véase sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1452 de 2019 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia), porque el ordenamiento constitucional y legal colombiano no hace esa distinción, a más que las razones expuestas por la Corte Suprema de Justicia tienen aplicabilidad tanto para beneficiarios como no del régimen de transición.

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, “...no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición...” (Sentencias SL 19.447 de 2017 y SL 1.452 y SL 1.688 de 2019), lo que significa que la firma del formulario no es suficiente para agotar el deber de información a cargo de la Administradora de Fondos de Pensiones que pretende captar un afiliado.

Esta Sala, acoge el planteamiento en la medida que se encuentran dados los presupuestos legales y jurisprudenciales para que proceda la declaratoria de ineficacia petitionada. Además, ninguna prueba en el plenario permite establecer que el traslado al régimen de ahorro individual por parte de la asegurada a Colfondos y su vinculación posterior a Protección se hubiese realizado bajo los parámetros de libertad informada y transparencia mínimos.

Ahora bien, se debe ocupar la Sala del análisis de la excepción de mérito de prescripción, la cual fue alegada por las codemandadas. Al respecto, ha de tenerse en cuenta que desde la existencia del Tribunal Supremo del Trabajo la jurisprudencia ha sostenido de manera invariable que el derecho a la pensión en sí mismo no prescribe, por ser una prestación social cuyo disfrute obedece al hecho de ser de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, empero prescriben las mesadas o los reajustes pensionales exigibles que no se hubiesen cobrado por su beneficiario dentro del lapso trienal previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Sentencias de 18 de diciembre de 1954; y 18 de febrero de 2005, Radicado 21.378).

Adicionalmente, en la Sentencia SL 68.838 de 8 de mayo de 2019, la Sala de Casación Laboral explicó: **i)** que la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, como también lo es el derecho ciudadano a reivindicar en cualquier tiempo un derecho pensional, o a mejorar su prestación; **ii)** que el análisis de la prescripción no puede realizarse de forma aislada y desconectada de los derechos que pretenden reivindicarse a través de su reconocimiento; **iii)** que los hechos o estados jurídicos no prescriben, “a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que surjan de ello”; y **iv)** que esta última tesis cobra más sentido en relación con la pretensión de “ineficacia”, porque la sentencia que la declara, en realidad lo que hace es comprobar o constatar un estado de cosas surgido con anterioridad al inicio de la Litis.

De lo anterior se concluye, entonces, que no ha operado plazo extintivo alguno frente a la acción que dio origen al proceso, y tampoco prospera la excepción de prescripción de la acción de nulidad del acto jurídico propuesta por las codemandadas, se reitera, por encontrarse en estudio el tema bajo los presupuestos de la ineficacia.

Las apoderadas de la demandante y de Colpensiones consideran que se debe ordenar la devolución de todos los aportes de la cuenta de ahorro individual y además los dineros destinados al fondo de garantía de pensión mínima, los

rendimientos, los porcentajes reservados al pago de seguros provisionales y los gastos de administración. A juicio de la Sala, la postura planteada por las mencionadas apoderadas en el recurso de apelación está llamada a prosperar, en la medida que, las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia, conllevan que se impongan las restituciones, las cuales implican el traslado de la totalidad de los aportes existentes en la cuenta de ahorro individual de la demandante con los rendimientos generados por éstos en cada uno de los Fondos Privados, así como los descuentos efectuados para garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, por los periodos durante los cuales la accionante permaneció afiliada a dichos Fondos Privados, a la administradora cuya afiliación es válida, y en caso de que no se hubiera hecho. (Corte Constitucional, Sentencias C-1024 de 2004; SU - 062 de 2010 y SU - 130 de 2013, y Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sentencias SL4.964 de 2018, SL4.989 de 2018, SL1.421 de 2019 y SL1.688 de 2019).

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la administradora debe devolver al sistema la totalidad de los valores que haya recibido en razón de la afiliación, “...como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado...”. En tanto que “...al haber sido una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...” (Sentencia de 8 de septiembre de 2008, Radicado 31.989).

En consecuencia, se modificará y adicionará el numeral segundo de la providencia.

Pero si la sumatoria de todos los conceptos que se ordena trasladar, resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado en caso de que la demandante hubiera permanecido en el Régimen de Prima Media, serán Colfondos y Protección quienes asuman la diferencia que resultare, en proporción al periodo durante el cual la mencionada permaneció afiliada a cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones referidas. Por ende, se adicionará en este aspecto la decisión.

En el sentido antes mencionado, igualmente esta Sala de Decisión, acoge la línea jurisprudencial de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en lo relacionado con los reintegros que tendrá que hacer la administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con destino a Colpensiones una vez declarada la ineficacia, pues las equivalencias ente uno y otro régimen no tiene por qué asumirla un afiliado frente al cual se han realizado cotizaciones en la forma dispuesta por ley, y, de modo alguno puede trasladársele el detrimento en sus cotizaciones bien sea por el transcurso del tiempo, ora por deducción por concepto de cuotas de administración, para el fondo de garantía de pensión mínima y/o seguros previsionales.

Adicionalmente, se debe anotar que la regla del artículo 1746 del Código Civil no se limita al caso de pérdidas o deterioros, la misma es una previsión legal adicional a las restituciones a que hubiese legal, y es por ello que se reitera, esta Sala acoge en las restituciones las reglas pacíficas al respecto dictadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia en las anteriores referencias de esta providencia, para lo cual además no puede perderse del horizonte que los rendimientos son generados por un capital aportado a título de cotizaciones del trabajador y su empleador.

Las costas de la primera instancia corren en favor de la señora Luz Yaneth Peña Caicedo y a cargo de Colfondos y de Protección.

En esta instancia no se causaron costas.

Se absuelve a Colpensiones de las costas procesales de la primera instancia, en razón a que su conducta no dio lugar a la ineficacia que se declara, a más que fue citada a juicio para que en caso de sentencia adversa reciba los dineros objetos de restituciones a que haya lugar.

Así las cosas, se confirmará, modificará, adicionará y revocará la decisión que se revisa en apelación y consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

**PRIMERO:** Modificar y adicionar el numeral segundo de la sentencia, así:

Se **condena:** A Colfondos y a Protección, trasladar a Colpensiones, además de la totalidad de los valores que recibió con motivo de la afiliación de la señora Luz Yaneth Peña Caicedo, esto es, los dineros que se encuentran en la cuenta de ahorro individual incluyendo los rendimientos generados por éstos en dicho Fondo; los gastos u cuotas de administración de la cuenta, las sumas dinerarias que correspondan a los descuentos efectuados para garantía de pensión mínima y las sumas adicionales de la aseguradora, por los periodos durante los cuales la accionante permaneció afiliada a cada uno de los Fondos Privados, a la administradora cuya afiliación es válida, y en caso de que no se hubiera hecho.

**SEGUNDO:** Condenar a Colpensiones, a recibir de Colfondos y de Protección, los valores aludidos en el anterior numeral, e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral de la demandante.

**TERCERO:** Adicionar el numeral segundo de la sentencia en el sentido de que si la sumatoria de todos los conceptos que se ordena trasladar, tales como: rendimientos generados por los aportes existentes en la cuenta de ahorro individual de la actora, así como los descuentos efectuados para garantía de pensión mínima, gastos o cuotas de administración y las sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora, resultare inferior al valor total del aporte legal

correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado en caso de que la demandante hubiera permanecido en el régimen de prima media, serán Colfondos y Protección, quienes asuman la diferencia que resultare, en proporción al periodo durante el cual la mencionada permaneció afiliada a cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones referidas.

**CUARTO:** Se revoca la condena en costas a cargo de Colpensiones.

**QUINTO:** Las costas de la primera instancia corren en favor de la señora Luz Yaneth Peña Caicedo y a cargo de Colfondos y de Protección.

En esta instancia no se causaron costas.

**SEXTO:** Confirmar en lo demás la decisión que se revisa en apelación y consulta.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,



Jaime Alberto Aristizábal Gómez



John Jairo Acosta Pérez



Francisco Arango Torres

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADO** No. 139 fijado hoy en la secretaría de Este Tribunal a las 8 a.m. Medellín, 24 de Septiembre de 2020

\_\_\_\_\_  
Secretario